

Una experiencia universitaria frustrada. Persecución y represión antes del golpe en la Universidad de Mar del Plata

◆ *Gastón Julián Gil*

Política nacional, juventud y Universidad

Entre tantas verdades asumidas sobre el pasado histórico argentino, se da por descontado que el proceso militar (1976-1983) inauguró un antes y un después en una sociedad que sufrió un corte abrupto en un sistema de vida caracterizado por la democracia y el respeto a los intereses del pueblo. El regreso del peronismo al poder en 1973, tras 18 años de proscripción, y el fugaz ascenso al sillón presidencial de Juan Domingo Perón, el líder en el exilio, hasta su muerte en julio de 1974, inauguró un período de entusiasmo sostenido en una ciudadanía que podía expresarse plenamente después de casi dos décadas de interregnos militares y gobiernos elegidos en elecciones restringidas y carentes de la legitimidad necesaria para llevar adelante con éxito un proyecto político. Sin embargo, como se intenta mostrar en este artículo a partir de una etnografía de un proyecto académico en una universidad pública, el nuevo golpe militar y el terrorismo de estado no inauguraron ningún período de represión, sino que continuaron llevando adelante prácticas que se habían enraizado tiempo antes. Es decir, el aná-

◆ CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata

lisis de los actos administrativos de la Universidad de Mar del Plata, la confrontación con otras fuentes (documentales, periodísticas y académicas) junto con los testimonios de los testigos de época permiten acceder al modo en que el proceso militar resultó la continuidad de un trayecto que ya había empezado a transitarse con claridad un par de años atrás, incluso como consecuencia de procesos sociales mucho más largos.

Según Cavarozzi, la inestabilidad política que siguió al derrocamiento de Perón en 1955 fue el producto de la «disyunción» entre la sociedad y el funcionamiento de la política real generada por la exclusión (electoral y legal) del peronismo, que derivó en «fórmula política dual» (2006: 10). Desde la revolución, autodenominada «Libertadora», que en 1955 derrocó al segundo gobierno de Perón, el Poder Ejecutivo Nacional estuvo ocupado por militares o por gobiernos civiles que llegaron al poder mediante elecciones en las que el peronismo se encontraba proscripto. Los intentos que los gobiernos democráticos ejercieron por restablecer plenamente la legalidad se encontraron con una férrea oposición militar y de la propia Resistencia Peronista, cuyo objetivo esencial consistía en la vuelta de Perón, más allá de ciertos proyectos sindicales de imponer un «peronismo sin Perón». Ese «equilibrio dinámico» (*Ibid.*) se mantuvo hasta 1966 dado por la alternancia cívico-militar, en la que «cada gobierno del período se caracterizó por el hecho de que su perdurabilidad estuvo en jaque desde el momento mismo de su inauguración» (*Ibid.*: 10). El golpe militar de 1966, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, instauró un nuevo proceso, autodenominado «Revolución Argentina», en el que por primera vez la corporación militar se planteaba la posibilidad de establecer un gobierno a largo plazo sin intenciones de devolver el poder a los civiles. Luego de derrocar al radical Arturo Illia, el nuevo régimen del general Onganía dirigió su enfoque hacia las universidades, lo que culminó con la tristemente célebre «Noche de los Bastones Largos», el 29 de junio de 1966. En aquella oportunidad, el Ministerio del Interior del nuevo gobierno militar de Onganía decidió disolver el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y propuso que los decanos continuaran en sus cargos como interventores. La Facultad de Ciencias Exactas resistió desde un primer momento, pero fue duramente reprimida por tropas militares, que ya habían nominado a la universidad como un «reducto comunista». Profesores, autoridades y alumnos (en todos los casos, de ambos géneros) fueron golpeados duramente y muchos de ellos conducidos a prisión. La golpiza recibida por profesores y estudiantes constituyó todo un escándalo internacional, debido en gran parte a la presencia de profesores

extranjeros.¹ Tan sólo en la UBA, los cálculos involucran a 1.378 docentes que abandonaron sus cargos, aunque se estima que el mayor impacto se produjo en áreas más dinámicas, sobre todo en Ciencias Exactas y Filosofía y Letras (Buchbinder, 2005). Según Suasnábar, el «renuncismo» masivo parece haber sido más bien una excepcionalidad porteña que una invariante en todas las universidades nacionales. El mismo autor acuerda en que la consecuencia generalizada sí fue la radicalización política de los jóvenes, pero demuestra cómo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata se dio una «mezcla de ruptura y continuidad» (2002: 58).

Durante los cuatro años de Onganía en la presidencia, la intensificación de la represión de las protestas sociales y los diversos focos de descontento popular sólo conseguirían acrecentar aún más la radicalización política de una parte significativa de la sociedad argentina, en especial la juventud. Al calor de las luchas populares que iban gestándose en otros frentes (sindicales, por ejemplo), una franja considerable de la militancia universitaria experimentó una marcada «peronización», a la par de que el amplio movimiento de la Resistencia Peronista se radicalizaba cada vez más sentando alguna de las bases para la conformación de organizaciones político-militares entre fines de los sesenta y principios de los setenta. En ese sentido, el nuevo gobierno militar resultó un eslabón fundamental para «peronizar» la vida universitaria, aunque por razones diversas. En principio, la política represiva llevada adelante en toda la sociedad y la intervención en las universidades radicalizaron las opciones políticas de los estudiantes, que paulatinamente fueron inclinándose hacia posiciones revolucionarias que reivindicaban la figura del depuesto líder en exilio. Además, el peronismo ocupó espacios en la vida universitaria durante el régimen de Onganía, aprovechando algunos de los espacios vacíos que, en protesta contra la intervención de las universidades nacionales, dejaron muchos académicos reconocidos, adherentes en general a los principios del reformismo. Como señala Sarlo, la universidad argentina «durante varios años fue la escena de alineamientos según ideas que no respondían por completo a los partidos políticos nacionales y que cruzaban, en su sistema de alianzas y en las listas de representantes, las líneas de esos partidos» (2001: 68), aunque ya a comienzos de la década del sesenta la lógica de la política

¹ El caso más sonado fue el de Warren Ambrose, un catedrático norteamericano del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) que la UNESCO había contratado para que diera clases en la UBA. Cuando el *New York Times* publicó, el 30 de julio, la carta que Ambrose envió en donde condenó con dureza la represión, el episodio cobró resonancia internacional.

nacional comenzó a penetrar la vida política universitaria. En el caso de la izquierda, tenía una importante expresión universitaria, pero no orgánicamente a través de partidos políticos (*Ibid.*). En ese marco, la identidad «reformista», que podía aglutinar a radicales y comunistas, se enfrentaba a distintas vertientes del «humanismo cristiano», que, pese a contener originalmente sectores «de derecha», se estabilizó en «la franja ‘progresista’» (*Ibid.*: 68).

Como sostiene Barletta (2001), se reconoce desde el peronismo la existencia de expectativas favorables en el gobierno de Onganía, aunque las definen como «fugaces» y hasta admiten cierta vergüenza por haber adoptado esa postura. La raigambre nacionalista y católica del nuevo gobierno entusiasmó a muchos militantes peronistas, tal cual ocurrió en el ámbito universitario. En algunos casos se admitía la ilegitimidad del origen, pero se abrigaba la esperanza de que retornara el «espíritu popular» del peronismo. En la universidad, las nuevas agrupaciones «peronizadas» se propusieron combatir el antiperonismo, el reformismo y el participacionismo, para así «nacionalizar» la conciencia del estudiantado. Todo ello apuntaba a desarrollar capacidades de movilización como la protesta callejera, dentro de una propuesta de «elevar en lo posible los niveles de violencia del conjunto» (*Ibid.*). Además, se tenía prevista la implementación sistemática de la dedicación exclusiva para los docentes en tres áreas: estudio, trabajo e inserción política. En efecto, de la idea de la universidad como un «servicio público» se fue pasando paulatinamente a una función social definida en torno a la apertura hacia el pueblo y en servicio del pueblo, subordinando la institución a los conflictos y tensiones dominantes en la sociedad (Sarlo, 2001). Por ello:

el movimiento estudiantil, desde la segunda mitad de los años sesenta, recogerá ese desafío, afirmando, en los hechos y en sus declaraciones, el carácter *no específico* de la cuestión universitaria, lo que equivale a declarar su inexistencia como problema en una Nación donde los verdaderos problemas son los del atraso, la penetración imperialista, las oligarquías asociadas con el capital extranjero, los sectores medios indecisos en su alianza con las clases trabajadoras. (*Ibid.*: 75)

Como indican Barletta y Tortti, para esa juventud radicalizada «la universidad era una ‘institución del régimen’, pilar fundamental de la proscripción del peronismo en la esfera política, académica y social. Desde este punto de vista, gran parte de las irrupciones del peronismo en la universidad, antes de 1966,

estuvieron signadas por actos violentos» (2002: 116). En ese sentido, las intervenciones a las altas casas de estudio durante el peronismo fueron interpretadas parcialmente por algunos autores como un primer paso para modificar un perfil históricamente «antinacional» y «antipopular» (Hernández Arregui, 2006). La influencia de los historiadores revisionistas y los «pensadores nacionales» fue tan potente que las figuras de «intelectual e intelectual comprometido comienzan a acercarse hasta llegar a ser sinónimos. De esta superposición semántica se alimenta también la idea de que ‘intelectual’ quiere decir siempre ‘intelectual de izquierda’, difundida con la espontaneidad que tiene el sentido común» (Sarlo, 2001: 102). La mayor parte de esas intervenciones se plasmó en el género ensayístico, a partir del cual estos intelectuales volcaron sus inquietudes de «encontrar diagnósticos a partir de los cuales predecir un futuro cuyas señales eran por demás oscuras». El ensayo le proporcionó a estos intelectuales una tradición prestigiosa a la cual pudieron adherir, además de la clave para un exitoso encuentro con un público lector que estaba ávido de respuestas para los nuevos tiempos (Saítta, 2004).

Esa idea de «Nueva Universidad» que fue gestándose en torno a ese «pensamiento nacional» fue configurándose a partir de diversas experiencias, como las cátedras nacionales, la aparición de revistas como *Envido* y, sobre todo, *Antropología del Terver Mundo*, la formación de agrupaciones estudiantiles peronistas y los proyectos de transformación para colocarla «al servicio del pueblo». Esta «peronización» podría «ser pensada como el capítulo universitario de un proceso de activación social y política que envolvió a la sociedad argentina por aquellos años, también puede ser comprendida dentro de aquella historia en cuyo transcurso la universidad ocupó un papel preponderante en las disputas políticas nacionales y, a la vez, resultó profundamente atravesada por ellas» (Barletta y Tortti, 2002: 107). En ese contexto, las ciencias sociales en el país experimentaron una directa influencia de esos procesos políticos que colocaban a la universidad –y, por ende, a todas las disciplinas– como un instrumento más para lograr la ansiada «liberación nacional» (Buchbinder, 2005; Pucciarelli, 1999; Barletta y Lenci, 2001, Barletta y Tortti, 2002).

Precisamente, un número cada vez más creciente de jóvenes –en consonancia con una tendencia continental– se fue acercando, hacia fines de los sesenta, a las nacientes organizaciones que, con carácter revolucionario, reivindicaban la lucha armada como forma de acceso al poder. Algunas de esas organizaciones nacieron en el seno del peronismo, pero muchas otras, inspiradas en posiciones

de izquierda, también terminaron «peronizándose». Aunque el nuevo gobierno militar de Lanusse intentó, a partir de 1970, establecer acuerdos políticos y sociales que permitieran una salida democrática sin restricciones y logró cierto apoyo de algunos partidos políticos y sindicatos (El GAN, Gran Acuerdo Nacional), las nuevas organizaciones político-militares continuaron creciendo y aceleraron el proceso de lucha armada contra el gobierno. Sin embargo, el proceso electoral de 1973 permitió la vuelta del peronismo a la jefatura del Estado con Héctor J. Cámpora, cuya posterior renuncia facilitaría el retorno a la presidencia del propio Juan Domingo Perón.² Lejos de frenar el desarrollo de las organizaciones armadas (peronistas y no peronistas), durante el gobierno democrático se produjo un crecimiento sostenido (principalmente Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo³), y el duro enfrentamiento faccioso entre la derecha y la izquierda peronistas signaron el período por los elevados índices de violencia política que prepararon el terreno para un golpe militar que desarrollaría un genocidio ideológico sin precedentes en la historia política argentina. En las universidades, estos conflictos quedaron expresados de un modo evidente, ya que las casas de estudio fueron objeto de intervenciones recurrentes y sistemáticas y expresaron con bastante elocuencia las tensiones de aquellos tiempos de utopía, pero también de muertes y violencia.

En las universidades, la Juventud Peronista adquirió un papel relevante, catalizado en gran parte por el crecimiento de la organización político-militar Montoneros⁴. Amaral sostiene que el nacimiento de Montoneros fue en principio el resultado de dos procesos diferentes, el primero de los cuales se liga a la opción por la lucha armada de una importante franja de los jóvenes en Latinoamérica y el segundo

² Una cláusula de residencia que impuso el gobierno de Lanusse le impidió a Juan Domingo Perón presentarse en las elecciones. Bajo el lema «Cámpora al gobierno, Perón al poder», el peronismo recuperó la presidencia y, tras la eliminación de esa cláusula y la renuncia del propio Cámpora, finalmente Perón logró ser candidato, esta vez acompañado en la vicepresidencia por su tercera esposa, María Estela Martínez. Según Sigal y Verón, «un candidato que se presentó al sufragio prometiendo que si ganaba renunciaría a favor de otro candidato que estaba ausente; llevó a la elección, por tercera vez en la historia argentina, al general Perón, apoyado por enemigos irreconciliables; preparó, en fin, las condiciones que hicieron posible la peor masacre de la historia política argentina» (2003: 14).

³ Organización surgida en el seno del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), habitualmente autodenominada guerrilla «guevarista».

⁴ Según Lanusse (2005), existe respecto al surgimiento de Montoneros una «leyenda heroica» que gira en torno al «mito de los 12 fundadores», como expresión genuina del campo popular y, sobre todo, como redención del largo sufrimiento peronista. La aparición pública de Montoneros se concretó en 1970 con el asesinato («ajusticiamiento») del general Aramburu, postulado como un «acto virtuoso» (Sarlo, 2003) a partir del cual «después de 1970, todo parecía posible, las cosas salían de su molde y se desbocaban las fuerzas de la pasión revolucionaria que tuvo tanto de terrible como de generoso. En mayo de 1970 la Argentina había vivido un hecho único. La sangre empezaba a correr» (*Ibid.*: 200).

con la radicalización de los jóvenes católicos que siguieron el mismo camino. Este autor señala que existió, junto con la urgencia revolucionaria instalada por la Revolución Cubana y el fermento secular dentro de la Iglesia, un tercer factor: «la identidad peronista» (2005: 19). Esta identidad peronista es descubierta por estos actores, según el mismo autor, no tanto por coincidencias programáticas con Perón, sino a partir del dato de que los pobres, como víctimas de «un pecado colectivo», eran mayoritariamente peronistas. Por todo ello concluye que «el objetivo de Montoneros era el socialismo; su mitología, la lucha armada; y su identidad, peronista» (*Ibid.*: 20). Lanusse detalla cómo la organización Montoneros se formó a partir de la fusión de diversos *grupos* (militantes que formaban aparatos armados clandestinos, como experiencias cerradas) que surgieron de *círculos* (niveles intermedios, como el cristianismo radicalizado) y *ámbitos* (organizaciones de superficie, por ejemplo, dentro del peronismo revolucionario) que les proporcionaron contenidos ideológicos y redes sociales y políticas fundamentales para organizarse. En líneas generales, «eran el emergente de un movimiento mucho más amplio: en primer término, el de los católicos que optaban por los pobres, y finalmente el de los cristianos radicalizados y peronizados» (2005: 185). Al respecto, Martuccelli y Svampa indican que para el peronismo de los setenta «el campo político era concebido como el terreno de un enfrentamiento entre ‘enemigos’ más que como un lugar de conflicto social que opone ‘adversarios’ con intereses diferentes» (1997: 133). Los nuevos militantes que componían la juventud peronista, que en gran proporción procedían de los sectores medios y del ámbito universitario, se habían definido por una opción nacionalista y revolucionaria. En ese contexto:

esos militantes revolucionarios fueron definidos por una fuerte oposición con otros militantes peronistas: la que divide a los ‘viejos’ militantes sindicales y los ‘jóvenes’ militantes políticos. Una oposición que no puede reducirse a los orígenes sociales, al área de acción política ni a un clivaje generacional (y ello a pesar del rol importante que tenga cada una de estas dimensiones). Para unos y otros, se tratará de definir, a través y desde su práctica política, lo propio del peronismo, y más tarde excluir, por el recurso a la violencia, a los ‘otros’. (*Ibid.*: 141)

Tras el deceso de Perón y la asunción de la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, la inestabilidad política y económica (especialmente la inflación) aumentó notoriamente a medida que el desgaste del nuevo gobierno abría

el camino para la intervención militar. Precisamente, las Fuerzas Armadas comenzaron a hacerse cargo del combate contra las guerrillas rurales y urbanas y finalmente tomaron el poder en marzo de 1976, cuando todavía algunas fuerzas políticas pretendían restablecer algún tipo de legitimidad a partir de las elecciones presidenciales anticipadas que se iban a celebrar en la segunda mitad de aquel año.

La carrera de antropología en los papeles

Un lugar común en los análisis retrospectivos de la dictadura militar —y también de muchos otros procesos históricos es concebir los tiempos históricos como rupturas precisas a partir de cuya emergencia puede establecerse un antes y un después claramente discriminados. En esa sintonía, se suele considerar que el proceso militar inició una etapa de represión y persecución de distintas fuerzas sociales (militantes de las organizaciones políticos-militares, de los partidos políticos progresistas, intelectuales, artistas, miembros de organizaciones sociales, académicos, trabajadores) que produjo un corte abrupto en una sociedad que asistió desprevenida e indefensa a la furia militar. En efecto, el gobierno dictatorial inaugurado en marzo de 1976 constituyó una clara ruptura en la vida institucional de la Argentina, instaurando un régimen de carácter

impersonal, del conjunto de las fuerzas armadas, que procuraba evitar la personalización del poder a través de un sistema de normas que establecía un cuerpo colegiado (la Junta Militar) como órgano supremo del Estado, y un órgano impersonal (el Presidente de la Nación) como ejecutor de las grandes políticas trazadas por el poder supremo. (Quiroga, 2004: 15)

Al dictaminar que la sociedad argentina se encontraba jaqueada por un desorden que hacía peligrar la integridad del cuerpo social, la junta militar también definió el contenido sustantivo de ese orden que buscaba instaurar. Esa intervención se asentaba, por supuesto, en las propias características de la cultura política nacional que estableció un consenso a partir del cual las Fuerzas Armadas se constituyeron de manera creciente —sobre todo a partir de la década del sesenta (Ollier, 2005) como un actor legítimo en los asuntos de la política nacional. En este caso, frente al fantasma de la disolución nacional, se le asignó «a los militares la condición que siempre se habían atribuido a sí mismos: la de garantía

última de la unidad y el orden de la nación» (Novaro y Palermo, 2006: 31). Esa legitimidad para actuar como resguardo del orden social que avasalló sistemáticamente la legalidad llevó a ese juego pendular entre los partidos políticos y los militares, caracterizado por complejas relaciones de aliado-adversario, a un punto extremo en el ejercicio de la violencia política. El nuevo gobierno operó sobre un amplio consenso social, pero se trataba de una legitimidad precaria (Quiroga, 2004) que se asentaba principalmente en el origen, es decir, sobre «la ilusión de una ‘perfecta coincidencia’» (Novaro y Palermo, 2006: 33), que en menos de dos años comenzaría a resquebrajarse paulatinamente.

Sin embargo, el análisis de los actos administrativos de los órganos de gobierno de la Universidad de Mar del Plata (ordenanzas del Consejo Superior; resoluciones de rectorado, de intervención, de decanato y de despacho de rectorado; ordenanzas de consejos académicos, legajos de personal, entre otros actos administrativos) permite identificar una relativa continuidad de las políticas de Estado en referencia con la educación superior. Obviamente se encuentran cambios profundos (por ejemplo, las intervenciones en 1973 y el propio golpe de 1976), pero esos eventos no fueron sino catalizadores de procesos previos que desembocaron en etapas de mayor aceleración de cambios que ya se estaban produciendo.

Como se ha sugerido más arriba, la universidad constituye, como también lo pueden ser otras instituciones o espacios sociales, toda una «arena social» a través de la cual pueden comprenderse alguno de los procesos más importantes de la vida política argentina. Por supuesto, se trata del análisis de un caso particular, con sus propias lógicas y estilos institucionales, pero a través del cual es posible aproximarse a procesos más amplios, de alcance regional y nacional. Por ello es que, más allá de los matices y contraejemplos posibles, este paper pretende mostrar, principalmente a partir del análisis de los archivos de la Universidad Nacional de Mar del Plata referidos a la carrera de antropología, que la persecución ideológica y la represión de Estado comenzaron un tiempo antes (casi un año y medio) del golpe de Estado de 1976. Se describe entonces un contexto que permitió de una manera muy clara que, cuando los militares se hicieron con el poder, prácticamente todo el trabajo de «limpieza» estaba casi completo. Por consiguiente, el análisis del nacimiento, desarrollo, desmantelamiento y destrucción de la carrera de antropología en la por entonces Universidad Provincial de Mar del Plata permite entender gran parte de los fenómenos que envolvieron al país durante la década del setenta y cómo las propias instituciones democráticas hicieron posible un estado de cosas para que luego el terrorismo de Estado

implantado con toda la virulencia posible barrera con cualquier tipo de oposición, fuera pasiva, activa, ideológica o militar. El análisis de los distintos actos administrativos de un entorno institucional como la Universidad de Mar del Plata permite acceder a un panorama bastante preciso de los lineamientos políticos dominantes y del contexto sociopolítico de un país convulsionado que se encaminaba a experimentar un proceso de represión de Estado sin precedentes. En ese sentido, la carrera de antropología ofrece la posibilidad de leer muchas de las situaciones que envolvieron al país y constituye una interesante vía de acceso para describir cómo los sueños generacionales se estrellaron contra una realidad que no sólo no dejaría lugar a las utopías de liberación nacional y patria socialista, sino que tampoco permitiría que proyectos más modestos (como una consolidación disciplinar) pudieran llegar a buen suceso.

La carrera de antropología de Mar del Plata fue organizada en 1968 por José Antonio Güemes, y al año siguiente los primeros alumnos comenzaron a cursar materias. Sin embargo, ese pasado primigenio fue rápidamente borrado y en 1971 se produjo una refundación de la carrera a partir de un cambio de enfoque dirigido por Eduardo Menéndez, quien eliminó completamente en la práctica todo lo hecho hasta el momento, de una clara orientación culturalista y folclórica, para establecer en su lugar un plan concebido desde la antropología social. Güemes tenía un breve pasado militar, ya que, graduado como subteniente, fue pasado a retiro efectivo con ese mismo grado. Nacido en Salta en 1910, obtuvo el título de Profesor de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1946. Revistaba como antecedentes haber trabajado de docente en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de La Plata, entre 1934 y 1938, en el Colegio San José de la localidad bonaerense de Victoria, entre 1938 y 1944, en la Universidad Nacional de La Plata, entre 1952 y 1954, y en la Universidad de Buenos Aires, entre 1953 y el 10 de octubre de 1955, cuando corrió la misma suerte que José Imbelloni, a quien definía como su maestro⁵. En sus antecedentes declarados, antes de hacerse cargo del decanato en Mar del Plata, se registran tareas docentes en la Universidad del Neuquén entre 1965 y el 31 de marzo de 1968.

⁵ José Imbelloni era un antropólogo italiano que adhirió fervientemente al peronismo. Dirigió el Museo Etnográfico de Buenos Aires hasta la Revolución Libertadora que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón (1955), momento en el que fue expulsado de sus cargos públicos, junto con los más notorios adherentes al régimen depuesto. Uno de sus discípulos, el también italiano Marcelo Bórmida, sería luego una figura descollante en la antropología porteña hasta finales de la década del setenta.

Güemes había sido nombrado decano de la Facultad de Psicología el 22 de marzo de 1968 por el Poder Ejecutivo Provincial, y por esa misma vía se le dieron por terminadas sus funciones en diciembre de 1970⁶. En sus casi tres años de gestión, la Facultad de Psicología, que sólo ofrecía esa especialidad, amplió su oferta académica a sociología, antropología, ciencias de la educación y ciencias políticas y pasó a denominarse Facultad de Humanidades. La carrera de antropología que había gestado estaba sostenida en su gran mayoría por las materias de psicología y por algunas nuevas asignaturas aprobadas en el ya vigente plan de estudios de sociología. Güemes le había dado forma a una carrera a medida de sus inclinaciones teóricas y que tenía como fundamentos a las cátedras que dictaba en la facultad: Introducción a las Ciencias de la Cultura, Antropología Filosófica y Ética. De este modo, a partir de la Resolución de Decanato No. 65 del 7 de julio de 1968, se creó la carrera de antropología. En los fundamentos se dejó constancia que sólo se hacía necesaria la apertura de nueve cátedras nuevas para completar la estructura curricular, como complemento de otras 23 asignaturas que se dictaban en psicología y en sociología. En esa misma resolución se mencionaba la necesidad de cubrir las «inquietudes de los estudiantes de la región» y se especificaba que «el antropólogo representa un papel primordial en las modernas organizaciones económico-sociales». Aquel plan original incluía una monografía de licenciatura, para la cual era obligatorio adscribirse al Departamento de Humanidades. Incluso tenía previsto un doctorado, con una investigación de un año y la redacción de una tesis doctoral sobre un tema original y una extensión no menor a 100 páginas. En el primer año se cursaba Introducción a las Ciencias de la Cultura, Introducción a la Psicología, Introducción a la Sociología, Introducción a la Filosofía, Economía Social y Biología Humana. En el segundo año estaban programadas Antropología Física, Sociología Sistemática, Metodología Estadística, Psicología de la Personalidad, Folklore General y Ciencias Políticas. En el tercer año se cursaban Prehistoria del Viejo Mundo, Teoría y Metodología de la Investigación, Antropogeografía, Historia Económica y Social, Antropología Cultural y Psicología Profunda. En cuarto año se contemplaban Técnicas de Investigación Social, Prehistoria, Folklore Argenti-

⁶ Un año más tarde, cuando la Facultad cambió su nombre a Humanidades (11 de febrero de 1969), fue ratificado en el cargo, además de que previamente se lo había designado como reemplazante natural de rector en caso de eventual ausencia. El decreto de Poder Ejecutivo Provincial No. 5157 dio por terminadas sus funciones el 30 de diciembre de 1970. Posteriormente, el recurso de revocatoria que interpuso fue rechazado por el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires mediante decreto No. 6542 del 16 de noviembre de 1972.

no, Psicología Social, Antropología Filosófica y Sociología Argentina y Regional. El plan culminaba en el quinto con Antropología Social, Lingüística, Filosofía de la Historia, Ética, un seminario sobre Sociología de la Religión y otro sobre Sociología del Arte.

La destitución de Güemes abrió el espacio para que pudieran cobrar un protagonismo cada vez mayor en la gestión de la Facultad de Humanidades un grupo de sociólogos identificados con el peronismo, algunos de ellos graduados en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. Precisamente, dos de esos sociólogos, Julio Aurelio y Ernesto Hipólito, quien al poco tiempo sería nombrado decano de la facultad, fueron quienes contactaron a Eduardo Menéndez para que se hiciera cargo del vacío en antropología. Más allá del plan original de Güemes, a principios de 1970 se había aprobado como plan vigente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de «arbitrar el medio más eficaz para que los títulos que otorga esta universidad tengan validez nacional y que, de no hacerlo, se perjudicaría moral y espiritualmente a los alumnos de la mencionada carrera que cursarán segundo año» (Ordenanza de Consejo Superior No. 35, 19 de febrero de 1970). Según su testimonio, Aurelio organizó en El Salvador, desde 1966 (luego de la Noche de los Bastones Largos), un programa curricular de sociología «de avanzada. Allí pude convocar a figuras como José Nun o Miguel Murmis⁷ y al propio Menéndez». Menéndez dictaba Antropología General y Antropología Sociocultural en la Escuela de Sociología y junto con ellos concretó la reorganización de la carrera.⁸ Eran épocas de gran convulsión para el país, los ecos del secuestro de Aramburu impactaban fuertemente en una juventud que se organizaba militarmente para combatir a la dictadura de Lanusse, recordada luego retrospectivamente como la *dictablanda*. La universidad fue en ese sentido uno de los espacios en los que esa efervescencia, esa búsqueda de un cambio radical en la estructura social y política, se plasmó en su mayor dimensión. La militancia política se vivía dentro de la

⁷ Ambos son dos de las figuras más destacadas de las ciencias sociales en el país en las últimas décadas. José Nun se formó como abogado y luego se especializó en problemáticas de desarrollo económico y ciencias políticas. Durante los años sesenta fue parte activa de los principales debates de las ciencias sociales en Latinoamérica, en especial las cuestiones referidas a la marginalidad social. Miguel Murmis se graduó originalmente en filosofía y fue uno de los organizadores de la carrera de sociología de la UBA en 1958. A mediados del sesenta ya era uno de los sociólogos de mayor prestigio en el país, época en la que participó en la fundación del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICS).

⁸ Además de la Universidad del Salvador, Menéndez cumplía tareas docentes en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano, donde enseñaba Teoría Sociológica e Introducción a la Antropología Social.

universidad casi como un compromiso irrenunciable, y la preeminencia de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) era un hecho evidente.

Aunque el cargo de director de la carrera (o de departamento) no existía, las autoridades de la universidad y de la facultad facilitaron el cuerpo normativo, a partir de la Resolución del Decano Interventor Interino No. 38 del 16 de abril de 1971, para «reestructurar la carrera de antropología», dado que «es natural que dichas gestiones estén orientadas por un profesor idóneo con títulos y desempeño específicos» y que «que es imperioso adoptar medidas de emergencia a fin de proseguir normalmente el dictado de la carrera». Por ello, se resolvió que las materias Etnología General e Introducción a las Ciencias Antropológicas «deberán figurar en el futuro Plan de la carrera». Para esa primera etapa de refundación, Menéndez convocó a Mirtha Lischetti y a María Rosa Neufeld, antiguas compañeras en la UBA y los pesares de los «Bastones Largos» y compañeras de camino en proyectos de investigación como el que llevaron adelante sobre problemáticas de salud en el Instituto Di Tella, bajo la dirección de Esther Hermitte.

Paulatinamente, la Facultad de Humanidades, bajo la órbita de Ernesto H. Hipólito, creó los departamentos de Ciencias Antropológicas, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Metodología y Ciencias de la Educación y Planificación Educativa, dado que «es necesario adecuar la organización de los departamentos a la evolución de las carreras de la Facultad». En ese marco, por lo que puede observarse en los actos administrativos, tanto en rectorado como en decanato, los primeros dos años de la carrera transcurrieron en plena expansión, de cobertura de cargos, de llegada de nuevos y jóvenes antropólogos, una expansión en la matrícula y un presupuesto cada vez mayor para, por ejemplo, ofrecer una importante cantidad de cargos con muchas horas de dedicación semanal para ayudantes alumnos.

A partir de 1972, comenzaron a sumarse muchos otros profesores para cubrir las materias del nuevo plan que se aprobó ese mismo año. El nuevo esquema constaba de un ciclo básico de 18 materias y un ciclo especializado (orientación arqueológica y orientación sociocultural) de 11 asignaturas más, de las cuales sólo una era optativa. Los primeros en sumarse en calidad de profesores titulares fueron el historiador Leandro Gutiérrez y el sociólogo Carlos Bastianes, quienes con el tiempo se terminarían transformando en rivales del propio Menéndez como «figuras fuertes» de la carrera, según recuerdan muchos estudiantes de la época. Al mismo tiempo que obtuvieron dos cátedras cada uno,

pasaron a integrar los jurados de los concursos internos para nombrar a los nuevos profesores y a los ayudantes alumnos, junto con los tres miembros originales. Además de los mencionados Gutiérrez (Historia Social General e Historia Social de América Latina) y Bastianes (Etnografía Americana y Técnicas de Investigación), fueron nombrados, en febrero de 1972, Carlos Herrán (adjunto en Principios de Arqueología y Técnicas de Investigación) y Enrique Gorostiaga (JTP en Etnografía Americana). Durante ese año, una cantidad superior a los 15 alumnos fueron designados como auxiliares docentes en distintas materias, a la par de que el cuerpo docente se seguía expandiendo, siempre con profesores viajeros. En algunos casos esos nombramientos se referían a tareas de docencia y, en otros, eran para labores poco especificadas, como «coordinadoras del trabajo de campo en Etnología General Sistemática II, y para efectuar tareas de fichaje bibliográfico para el Departamento de Ciencias Antropológicas». En ese mismo año llegaría, en el segundo cuatrimestre, Leopoldo Bartolomé (Introducción a la Antropología Económica), y al año siguiente, Hugo Ratier (Folklore General y Etnografía Extraamericana –África I). En ese contexto es que Eduardo Menéndez pasa a dirigir formalmente el departamento de Ciencias Antropológicas luego de haberlo conducido en los hechos, en principio sin ningún cargo formal y luego bajo la figura de secretario.

De acuerdo con los relatos de varios de los involucrados, será recién en 1973 cuando se empiecen a generar las primeras tensiones en el nivel de la gestión que involucraron a antropología. El triunfo electoral del candidato peronista Héctor J. Cámpora permitió que gran parte de izquierda peronista llegara al control de áreas importantes del Estado, tal cual fue el caso de la cartera de educación. Desde ese momento, las nuevas autoridades designadas por el ministro Jorge Taiana asumieron con la intención de plasmar los principios de «la universidad nacional y popular» que, con carácter revolucionario, pretendían sepultar a la vieja universidad que concebían elitista y burguesa. Las universidades nacionales fueron intervenidas y mayormente pasaron a ocupar rectorados y decanatos miembros de la Tendencia Revolucionaria, cada vez más absorbida por el empuje incontenible de adhesión popular de la organización político-militar Montoneros, ya en proceso de fusión con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Descamisados. Particularmente en el caso de la Universidad de Buenos Aires, el rector Rodolfo Puiggrós propició la elaboración de nuevos programas de estudio que expresaran, según sus propias palabras, «la doctrina nacional e impidan la infiltración del liberalismo, del positivismo, del historicismo, del utilitarismo, y yo

diría hasta del desarrollismo, todas formas con las que se disfrazaba la penetración ideológica». En la órbita provincial, la situación era similar, ya que había accedido a la gobernación Oscar Bidegain, claramente ligado a la izquierda peronista, aunque secundado por el gremialista metalúrgico Victorio Calabro. En la Universidad Provincial de Mar del Plata, el decreto No. 48 del Poder Ejecutivo firmado por Bidegain y el ministro de Educación, Alberto Baldrich (docente en Mar del Plata durante muchos años), designó como interventor a cargo del rectorado a Julio Aurelio el 4 de junio de 1973, «vista la crisis por la que atraviesa la universidad» y que «la liberación nacional exige poner definitivamente al servicio del pueblo las Universidades Argentinas». Más adelante, el mismo decreto rezaba que «se considera necesario reformar los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, con la participación de todos los sectores vinculados a la vida universitaria». Además de proponer un «régimen transitorio, se menciona la necesidad de lograr la «reconstrucción de las Universidades Argentinas». Aurelio pasó a nombrar decanos normalizadores en las distintas facultades y en Humanidades se designó al psiquiatra Hugo Guangirolí, por supuesto, un «compañero», como puede leerse en todas las resoluciones de nombramientos en las distintas unidades académicas. Sin embargo, los relatos de aquella época señalan la relevancia de una figura que, desde su cargo de asesor del interventor, tuvo una fuerte presencia en la facultad de Humanidades y chocó sistemáticamente contra la gestión de Antropología. Se trata de Néstor Momeño, un graduado de sociología de la UBA que, desde su cargo de asesor entre el 28 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1974, llegó a nombrar un «comisario político» en la carrera de antropología, cuyos principales referentes eran militantes del PRT⁹. De esta manera, Momeño hizo designar en el cargo de secretario del Departamento de Ciencias Antropológicas a un antropólogo que, como él, participaba del movimiento de las cátedras nacionales, y que además militaba en las *La P*, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)¹⁰. De todos modos, en los hechos jamás cumplió con

⁹ El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) le dio origen en 1970 al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que, bajo el liderazgo de Mario Roberto Santucho comenzó a priorizar las acciones militares por encima de la labor política.

¹⁰ A diferencia del *movimentismo* encarnado en Montoneros, a partir de la incorporación de grupos universitarios y de izquierda *La P* optó por el *alternativismo* (Raimundo, 2005), que postulaba la noción de guerra popular y prolongada, y reivindicaba la identidad peronista en tanto expresión de los intereses del pueblo peronista y no tanto de Perón, a quien reivindicaban sólo parcialmente. En ese sentido, «da 'alternativa independiente de la clase obrera y el pueblo peronista', significaba la adopción de una definida posición clasista, que proponía la organización política autónoma de los obreros peronistas por fuera de las estructuras formales del movimiento peronista» (*Ibid.*: 108). En ese proceso,

esa función ya que, como el mismo involucrado aclara, había abandonado la práctica académica para concentrarse exclusivamente en la militancia político-militar. Aunque por supuesto, los choques entre la gestión de Antropología y los principales referentes de las cátedras nacionales nunca se extinguieron.

Los aires triunfantes de la universidad nacional y popular no duraron demasiado, ni en el ámbito nacional ni en el provincial. Si bien tras la caída de Cámpora el área educativa siguió estando a cargo de la «juventud maravillosa», a la muerte de Perón, en julio de 1974, le siguió una rápida destitución del ministro Taiana y, por consiguiente, de todos los interventores por él designados. En el ámbito provincial, el gobernador Bidegain había durado pocos meses en su cargo, pero su reemplazante, Victorio Calabró, no propició una intervención tan directa como la que desencadenó el gobierno nacional de María Estela Martínez. De hecho, según el relato de Julio Aurelio, el ministro Baldrich conservó su cargo por pedido del propio Juan Domingo Perón. Pese a ser ratificado en el cargo, el propio Aurelio abandonó su gestión en el rectorado, a la que define como la de «un equilibrista entre varios sectores en pugna. Yo venía del peronismo pero no estaba encuadrado orgánicamente en ninguna facción del peronismo, como Montoneros. Entonces hubo que cuidar muchas relaciones porque si bien mantuve una cordial relación con la JP, también lo hice con las 62 Organizaciones».

Uno de los sectores en pugna era sin dudas la agrupación de derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), aunque su incidencia en el ámbito de

El Peronismo de Base se suma a las FAP como una columna de superficie, coincidiendo en tomar la figura de Perón como una herramienta más en la lucha revolucionaria y no «la herramienta», en lo que implicaba una crítica indirecta al líder (*Ibid.*). Las FAP fueron responsables en Mar del Plata de la muerte del secretario general de la CGT local, Marcelino Mansilla. En un comunicado oficial del mismo 27 de agosto de 1973, las FAP asumieron «ajusticiar al traidor Marcelino Mansilla frente a su casa en el oligárquico barrio ‘Los Troncos’». El mismo escrito detallaba que Mansilla «escaló posiciones en el gremio de la construcción, gracias a sus desvelos por cuidar los intereses de los patrones de la construcción. Avalaba así las miserables condiciones de trabajo a que se ven sometidos los obreros de la construcción de Mar del Plata, Buenos Aires y el resto del país. Así los trabajadores que vienen del interior, o los bolivianos, paraguayos y chilenos, tienen que ir a changuear a las obras, y se los toma previa firma del despido, y sin gozar de ningún beneficio social. Arriesgando sus vidas en los andamios, ven día a día caer de los mismos a muchos obreros cuyas familias no tienen derecho a indemnización alguna». Además, se le adjudicaba a Mansilla la participación en delaciones y negocios variados, como trata de blancas, gastronomía, gomería y boites, propiedades inmuebles varias y automóviles. También se acusaba a Mansilla de participar activamente en la dirección de la CNU y haber participado de la masacre de Ezeiza. Mansilla era muy cercano al dirigente nacional del sindicato de la construcción, UOCRA, Rogelio Coria, quien, según Gutman (2003), cultivó una relación cercana con el grupo Tacuara, organización que lo ayudó a quedarse con el control del gremio en la década del sesenta. El mismo autor detalla además que los tacuaristas (muchos de ellos luego de la CNU) resultaron fundamentales para desalojar a los dirigentes comunistas en el gremio de la construcción en Mar del Plata, en donde Mansilla se encumbraría como dirigente gremial.

la Facultad de Humanidades no parece haber sido, al menos según el testimonio de los informantes, demasiado significativa. La CNU había tenido su aparición pública con el asesinato de la estudiante de 18 años Silvia Filler, el 6 de diciembre de 1971. En aquella ocasión, un grupo de 16 militantes de esa agrupación ingresaron (armados mayormente con cachiporras, cadenas y bombos) a la asamblea que había convocado el Centro de Estudiantes de Arquitectura Marplatense (CEAM) en el Aula Magna de la Universidad Provincial de Mar del Plata. Ante los 300 estudiantes, dos de los ingresantes dispararon armas de fuego y acabaron con la vida de Filler. De todos modos, la CNU actuó mayoritariamente en el ámbito de la Universidad Católica, en donde funcionaba la Facultad de Derecho. En efecto, sus miembros más importantes eran abogados y estudiantes de abogacía, y en varios de los testimonios recogidos se destacan sucesos de graves enfrentamientos entre militantes de la JUP con la gente de la CNU, con tiros incluidos dentro del propio establecimiento ubicado en el Pasaje Catedral en pleno centro de la ciudad. La CNU operó fuertemente en La Plata (en donde se señala su nacimiento, hacia 1968) y Mar del Plata y fue desarrollando paulatinamente un acercamiento con grupos de la policía, las Fuerzas Armadas y otras facciones de derecha dentro del peronismo (como el Comando de Organización y luego la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A). En Mar del Plata, el punto más álgido del accionar de la CNU se dio con el asesinato de quien siempre fue señalado como su líder, el abogado Ernesto Piantoni¹¹, el 20 de marzo de 1975. Como represalia, la organización llevó a cabo una serie de secuestros seguidos de muerte, cuyo caso más paradigmático ha sido el de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen «Coca» Maggi, todo un símbolo trágico de la represión de la derecha peronista.

La Universidad de Mar del Plata, todavía en el ámbito provincial, comenzaría a sentir de un modo más estrecho los efectos del cambio a partir de la nacionalización, que reunió en 1975 a la Universidad Provincial y a la Universidad Católica. Ya antes de la muerte de Perón el interventor Julio Aurelio había abandonado la rectoría en marzo de 1974, y en su reemplazo serían nombradas distintas figuras, en algunos casos afines a la derecha peronista. En ese sentido, los documentos de 1974 nos marcan un proceso de transición en el que, junto con el sostenimiento de las líneas directrices plasmadas en toda su dimensión en 1973, comienzan a filtrarse algunos enfoques que se harían dominantes un año

¹¹ Piantoni es señalado además por Gutman (2003) como tesorero de Tacuara en Mar del Plata en 1962, nombrado por el jefe de la organización en esta ciudad, Carlos «Cuki» de la Garma.

más tarde. Por ejemplo, en una Resolución de Intervención No. 23 de la Facultad de Humanidades, el delegado interventor Alberto López Fianza aprobó como seminarios obligatorios para la carrera de sociología varias propuestas enmarcadas en las cátedras nacionales, como «Argentina: enfoques del tercer mundo», a cargo de Néstor Momeño, o «América Latina y los centros de poder mundial», a cargo de José Paradiso. Sin embargo, por primera vez aparece un seminario denominado «Seguridad, Defensa Nacional y Doctrina Peronista» que, con una modificación en su denominación, se seguiría dictando incluso después del golpe militar en 1976.

En ese contexto, la carrera de antropología comenzó a desmembrarse en 1974, en líneas generales, a causa del impacto de los avatares de la política nacional, pero en un principio en el marco de rivalidades personales que, frente a los continuos cambios en las estructuras directivas, posibilitaron una cadena de modificaciones que desembocarían en el lapso de un año en una renovación casi completa del claustro de profesores. Es particularmente a partir de la designación de Juan Samaja como delegado interventor de la Facultad de Humanidades, a mediados de 1974, cuando empieza la retirada del grupo original de la segunda fundación de la carrera. En esos meses, fugazmente cobraron relevancia en la dirección de los Departamentos de Ciencias Antropológicas y Sociología las figuras de Leandro Gutiérrez¹² y Carlos Bastianes, quienes ya venían rivalizando personalmente con Menéndez y, según palabras de una profesora de la carrera, «nunca dejaron de acosarlo». La salida de Menéndez se concretó mediante una renuncia el 26 de agosto de 1974, en la que adujo razones de tiempo para abocarse a las tareas de director. Ese retiro inauguró un proceso que se profundizaría al año siguiente, cuando ya a mediados de 1975 apenas uno de los profesores que fue nombrado entre 1971 y 1973 se mantenía en sus cargos. Y el pase a la clandestinidad de Montoneros, desde el 3 de septiembre de 1974, no haría más que encaminar a una carrera vinculada con ideologías contestatarias hacia un pronto ocaso.¹³ No pasaría ni siquiera un año de la primera graduación en diciembre de 1974 cuando ya la nacionalizada universidad de Mar del Plata determinó el cierre de inscripción y la reformulación de las carreras humanísticas.

¹² El mismo 26 de agosto de 1974 fue designado Leandro Gutiérrez como director del Departamento de Ciencias Antropológicas.

¹³ Según Calveiro, esta determinación «condenó a muerte a sus organizaciones de base territoriales, sindicales, estudiantiles, que aunque siguieron intentando una batalla cada vez más desigual dentro del movimiento peronista, estaban indisolublemente asociadas a Montoneros» (2005: 118).

En lo formal, tanto Eduardo Menéndez como sus dos más estrechas colaboradoras, María Rosa Neufeld¹⁴ y Mirtha Lischetti, serían limitados en sus cargos a partir del 13 de junio de 1975, mediante Resolución de Decanato No. 214. Por esos días ya estaban siendo limitados en sus cargos una porción significativa que los ayudantes alumnos designados en 1972, algunos sin demasiadas explicaciones y otros por el motivo recurrente de su ausencia en sus labores. Por ejemplo, el seguimiento de los actos administrativos que involucran a una ayudante alumna de la carrera que militaba en el Peronismo de Base permite leer con bastante claridad el trayecto seguido por los militantes de esta agrupación política. Se trata de una estudiante que nunca consiguió graduarse porque acató una de las directivas de *La P* de abandonar la universidad y proletarizarse completamente, y que era muy respetada por sus compañeros y docentes, muchos de quienes la definen como la «más brillante y estudiosa»¹⁵. Tenía un cargo de 20 horas semanales como «auxiliar docente» en el Departamento de Ciencias Antropológicas desde mayo de 1972, cargo que conservó hasta el 25 de abril de 1975, a causa de la Resolución de Intervención No. 40 de la Facultad de Humanidades, firmada por el nuevo delegado Juan Antonio Bargas, dado que «no registra asistencia desde el mes de mayo de 1974». La limitación de esta estudiante se fundamentó en que «una de las prioridades de esta gestión es regularizar las anormalidades existentes». Algo similar le había ocurrido a un antropólogo de marginal participación en la carrera, que había llegado a Mar del Plata para sumarse a las cátedras nacionales desde 1971. Fue limitado en sus cargos en mayo de 1975, a causa de que no concurría desde el 1º de marzo de ese mismo año. Este ordenamiento de la planta docente fue llevado adelante por el propio delegado Bargas, quien, según cuenta Omar, había aceptado hacerse cargo del decanato en un momento en que:

nadie quería hacerlo. El nuevo rector, José Catuogno, llamó a un grupo que se había separado de la JUP después del asesinato de Rucci —la JP Lealtad en el que también estaban varios de las cátedras nacionales que habían roto

¹⁴ Pocos días antes, el 22 de mayo de 1975, Neufeld había presentado su renuncia a la jefatura del Departamento de Ciencias Antropológicas.

¹⁵ La forma de organización revolucionaria del Peronismo de Base postulaba la organización política en los propios lugares de trabajo, no sólo en el ámbito sindical, sino también como un aporte para la construcción de un Ejército del Pueblo. Este tipo de agrupaciones se concebía como «un lugar donde los activistas discutan políticamente, se forman y capacitan, aprendiendo la experiencia de otros lugares y analizando permanentemente los problemas generales de la situación política, planifiquen las tareas a realizar en su lugar de trabajo» (Raimundo, 2005: 118-9). Se planeaba una guerra de guerrillas, sin jerarquías militares ni escuadrones, sino con células al estilo comando (*Ibid.*).

con Montoneros. Como en la CNU sabían que no podían manejar la Facultad nos ofrecieron manejarla a nosotros, con el único requisito de ordenarla administrativamente. Bargas, que era más grande que nosotros, y no estaba metido en nada, aceptó el decanato y tuvo que reconstituir la nómina de docentes, muchos de los cuales ya ni siquiera venían.

Aquellas limitaciones le costaron al delegado en decanato una bomba en su casa, por lo que inmediatamente presentó su renuncia. Según el mismo Omar, «ahí sí que nadie en su sano juicio se iba a meter a agarrar el decanato». Sólo un reciente graduado en ciencias políticas, que ni siquiera había recibido su título, manifestó interés en ocupar el máximo cargo de la facultad más conflictiva de la universidad. Así es que, a medida que se instrumentalizaba la nacionalización de la Universidad Provincial y la absorción de la Universidad Católica, el decanato de Humanidades quedó a cargo de Fernando Luchini, quien comenzó con una intensa y sistemática tarea de modificaciones en todo nivel. Las resoluciones de esa intervención comenzaron a plagarse de considerandos cada vez más extensos y que expresaban claramente un posicionamiento ideológico que buscaba diferenciarse de los lineamientos que gobernaron la universidad desde 1973. Algunos de quienes conocieron a Luchini aseguran que no tenía convicciones políticas firmes y hasta mencionan actividades comerciales vinculadas con la estafa como su principal medio de vida hasta ese momento. Rápidamente, desde el decanato se asumió la tarea de reestructuración de las carreras, para lo cual se organizaron «mesas de trabajo». Ante la escasa participación docente, el decano normalizador emitió la Resolución No.165 el 3 de junio de 1975, en la que dejaba expresa constancia que:

El Movimiento Nacional Justicialista tiene a las Mesas de Trabajo como un instrumento útil de participación y organización;
Que tal participación es en este caso ineludible para lograr el objetivo fundamental de nuestra gestión: realizar la transformación de la Facultad y su integración dentro del conjunto de la Comunidad Organizada;
Que la falta de respuesta se debe a una publicidad deficiente sobre la existencia, forma de funcionamiento y alcances de las Mesas de Trabajo.

Por tales motivos, el decano normalizador resolvió que cada docente debía ceder 15 minutos de sus cátedras entre el 9 y el 21 de junio, para lo cual serían

informados por autoridades provisorias de esas mesas de trabajo. Luchini era el segundo de los 18 graduados que dejó la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Provincial y a los pocos meses de haberse graduado (diciembre de 1974) le fue confiado el decanato de Humanidades cuando contaba con una experiencia docente casi nula y una inexistente producción científica en su área de formación. Sin embargo, esas circunstancias no le impidieron justificar muchas de las decisiones en la búsqueda de excelencia académica y en la necesidad de mejorar un cuadro de profesores cuyas figuras prestigiosas estaban siendo progresivamente eliminadas o forzadas a renunciar. En su reemplazo, los cargos se fueron completando por docentes con muy escasos antecedentes, algunos recientes graduados de Mar del Plata o de otras universidades, como la UBA o la UCA. Aunque muchos de los profesores (como Herrán o Ratier¹⁶) que venían desempeñando cargos desde 1972 fueron ratificados en sus cargos a comienzos de 1975, los diversos actos administrativos ya indicaban que «ante la proximidad de la iniciación del ciclo lectivo 1975, es propósito de esta gestión auspiciar una substancial organización acorde a la doctrina social del actual gobierno» (Resolución de Intervención No. 26). En el caso de antropología, la dirección y la secretaría del departamento le fueron confiadas a Leonor Luisa Pessina y a Simón Alejandro Niemand. Ambos eran graduados de la UBA y habían realizado trabajos sobre problemáticas de salud, medio ambiente y áreas rurales.

Precisamente, la clara oposición a los tiempos de la *universidad nacional y popular* generaba la necesidad de postular los principios que debían regir la universidad. En ocasión de un incidente protagonizado por un alumno de la carrera de sociología a finales de mayo de 1975, el decano normalizador Fernando Luchini resolvió en la Resolución No. 172 suspenderlo por 10 días, luego de justificar que:

Estas autoridades no pueden permitir bajo ningún concepto que se falte el debido respeto al personal, ya sea docente o no-docente, porque eso traería aparejado un lamentable retorno a épocas signadas por el desorden.

Que al mismo tiempo hay que tomar debida cuenta de la extrema juventud del imputado y de su carácter díscolo y rebelde propio de la edad y de la falta de formación ética de que toda su generación adolece, a causa, precisamente, del desorden en que cayeron las instituciones encargadas de inculcarla.

¹⁶ Desde mayo de 1975 renunció a sus cargos en Folklore General y Etnografía Extraamericana (África) I, aunque la Resolución de Intervención No. 69 propuso «rechazar, por improcedentes los términos en que está redactada la misma».

Precisamente, la vida política estudiantil fue una de las principales preocupaciones de las autoridades universitarias desde 1975. Ante la inminente nacionalización de la universidad, en la Resolución de Rectorado No. 501 del 14 de abril de 1975, firmada por el encargado de despacho de rectoría, se expresaba que «resulta aconsejable disponer los medios tendientes a evitar que los centros estudiantiles desvíen su actividad hacia otros fines que no sean los que corresponden a su misión esencial...». Por ende, resolvía «dejar expresamente establecido que los centros estudiantiles deberán constreñir su actividad a la función específicamente gremial, que es la defensa de los alumnos dentro de un marco de respeto y dignidad».

Las declaraciones en el decanato se iban radicalizando con el correr de los meses y alcanzaban tomas de posición mucho más frontales que cualquier considerando emitido por rectorado. En la resolución de decanato No. 345 del 7 de agosto de 1975, Luchini entendió que:

la deformación que ha sufrido la enseñanza universitaria a causa del abuso que se ha hecho de ideas y teorías ajenas a nuestra cultura nacional las que, bien utilizadas habrían ayudado a enriquecer nuestro patrimonio cultural, a elevar el nivel académico y mantenernos al tanto de las distintas corrientes de ideas que agitan el mundo pero que en manos de personajes inescrupulosos, traficantes de ideologías, se convierte en un arma de deformación de nuestro ser nacional.

En los considerandos de la resolución el decano normalizador expresó, además:

Que las personas conscientes del daño que se ha hecho durante años y años de prédica liberal, marxista, anarquizante y siempre contrarios a los altos intereses de la Nación, más si ocupamos posiciones directivas en la estructura educacional, debemos arbitrar los medios de combatir ese mal que puede ser irreparable, Que para revertir ese proceso deformante, no sería saludable en modo alguno restringir el uso y transmisión de ideas por nefastas que estas nos parezcan, ya que la represión indiscriminada nunca ha sido un medio idóneo para convencer y mucho menos para formar las mentes jóvenes, Que, por el contrario, es preciso combatir las ideas con ideas mejores y que es posible recuperar a las mentes extraviadas o confusas mostrándoles el camino correcto,

Que contamos con una Doctrina que basta ampliamente para mostrar ese camino sin necesidad siquiera con quienes no alcanzan siquiera a comprender la realidad del país,

Que este conocimiento nacional hay que sistematizarlo y ponerlo al alcance de los docentes de la Facultad para que estos a su vez, lo expongan en las aulas cuando la oportunidad temática de sus clases así lo aconseje.

Ante esa situación, se dejó establecida la creación de un seminario de «Profundización de Temas Nacionales», con carácter obligatorio para docentes y alumnos de 5° año de toda la Facultad, que iba a dictarse durante el segundo cuatrimestre los días sábados por la tarde en el Aula Magna. El seminario abarcaba temas tales como la Cultura Nacional (raíces y componentes), El Proyecto Nacional, la Tercera Posición y la Institucionalización de la Cultura Nacional.

Ya en la primera mitad de 1975, mientras se estaba organizando la nacionalización, las resoluciones en rectorado y en decanato muestran un discurso cada vez más volcado a la derecha del peronismo, por ejemplo, a partir de la utilización de términos de gran significación en la retórica peronista como la *comunidad organizada*. En ese marco, figuras reconocidas de la CNU comienzan a ser nombradas en puestos claves en rectorado, como intermediarios entre el rectorado y las facultades, o directamente como profesores titulares en seminarios *ad hoc* de clara orientación derechista.

La nacionalización de la Universidad Provincial y la absorción de la Universidad Católica de la que se había desprendido el obispado de Mar del Plata permitió que se dejaran sin efecto los planes de estudio vigentes a la fecha, aunque se garantizó la continuidad para los que estaban cursando las carreras. En esa misma Resolución de Rectorado No. 876 del 7 de noviembre de 1975, se crearon las carreras que iban a formar parte de la oferta académica de la Facultad de Humanidades. Mientras que todas las carreras provenientes de la Universidad Católica fueron ratificadas, la suerte de Antropología, Sociología, Psicología, Ciencias políticas y Ciencias de la Educación fue distinta. Antropología, Sociología y Ciencias Políticas fueron transformadas en especializaciones de postgrado (nunca concretadas) en el marco de un profesorado en ciencias sociales y posterior licenciatura.

Pese a que los antecedentes de los docentes que ocupaban los cargos eran sensiblemente inferiores a quienes estaban renunciando o directamente eran limitados en sus funciones, el discurso de la Facultad de Humanidades en los

actos administrativos abundaba en argumentos tales como la excelencia y la calidad de los profesores, además de otros recursos como la desorganización y el caos imperantes en otras épocas, en clara alusión a la *universidad nacional y popular* de 1973. El cambio de decano a principios de 1976 no trajo demasiadas modificaciones. El reemplazante de Luchini, Gabriel Prieto, un graduado en sociología en la UCA en Buenos Aires, emitió a poco de asumir la Resolución de Decanato No. 36 del 18 de febrero de 1976, en la que estimaba que:

Se ha podido constatar que, cuantiosos años de desorganización académica habían hecho olvidar al docente universitario su condición de servidor público, necesariamente subordinado a una disciplina y limitado en sus aspiraciones vocacionales individuales por los objetivos superiores de la institución a la que sirven y que se expresan concretamente en los proyectos de la conducción, los planes de actividades, estudios e investigaciones y las estructuras y las jerarquías que a tal fin se implementan;

Que a consecuencia de ello las cátedras se habían transformado en ámbitos de libre accionar académico, sumamente caprichosos y con escasa o nula relación funcional con los planes de estudio y la formación profesional de los educandos.

Que en recíproca conexión con este estado de cosas, el alumno sufrió una grave desorientación, propia de la desjerarquización y pérdida del nivel de sus estudios, la que motivó reacciones extemporáneas en el marco de una gran ansiedad frente a la anarquía académica reinante, desprovista de todo ordenamiento que le determinase al alumno sus obligaciones y derechos.

Todos estos fundamentos se utilizaron para imponer un férreo control de los departamentos sobre los programas de estudio, que obtenían a partir de allí una directa injerencia sobre el planeamiento de las asignaturas. Prieto, directamente ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia católica, se mantendría varios meses después del golpe militar, y no es posible encontrar en los actos administrativos posteriores al golpe militar, en 24 de marzo de 1976, una sola señal de que la política nacional había experimentado un cambio tan profundo. Ni siquiera el ritmo de las limitaciones se intensificó, y continuó en la misma línea que se había inaugurado en 1975. Los profesores siguieron renunciando y en su lugar siguieron siendo nombrados otros docentes, gran parte de ellos con escasos o nulos antecedentes. En el caso de la carrera de Antropología, no se

tomarían decisiones institucionales fuertes sino hasta diciembre de 1977, cuando se cerró definitivamente un ciclo que desde la renuncia de Eduardo Menéndez en agosto de 1974 a la dirección del Departamento de Ciencias Antropológicas inauguró un proceso de desmembramiento cuyo lógico final fue el cierre de una carrera que ya estaba desmantelada, vaciada de contenido, con estudiantes desaparecidos y con sus graduados exiliados o refugiados en sus proyectos familiares. En efecto, la Ordenanza del Consejo Superior No. 89 del 7 de diciembre de 1977 determinó la desaparición de las carreras de Antropología, Sociología y Psicología a partir de 1978. Como contrapartida, las carreras provenientes de la Universidad Católica (Historia, Letras, Geografía, Inglés) pasaron a dominar exclusivamente la oferta académica de una Facultad que ya no ofrecía ninguna de esas carreras que le habían dado vida a su proyecto original. Ni siquiera la restauración democrática permitió que la Facultad de Humanidades se planteara seriamente como política la reapertura de las carreras que habían quedado en el camino frente a la represión estatal. Las consecuencias de todo este proceso sobre el alumnado de la Facultad de Humanidades fueron devastadoras. La Resolución de Decanato No. 291 del 2 de septiembre de 1977 concreta la baja de un total de 971 alumnos de toda la Facultad, 80 de los cuales estudiaban antropología. Algunos de ellos figurarían luego en la lista de desaparecidos,¹⁷ y también pueden encontrarse a algunos de aquellos ayudantes alumnos nombrados en 1972. El registro de los graduados es elocuente. Una vez que la carrera arrojó a su primer graduado (Dolores Juliano, el 30 de diciembre de 1974), se vivió el proceso de mayor número de estudiantes que consiguieron su título, de los 38 que arrojó la carrera. Efectivamente, 1975 fue el año más prolífico, en el que 15 estudiantes lograron graduarse, muchos de ellos con la convicción de que debían hacerlo cuanto antes porque la universidad ya era un ámbito peligroso. Durante 1976 no se registró un sólo graduado, y el resto conseguiría hacerlo en casi su totalidad durante el proceso, cuando la carrera ya había sido formalmente cerrada. Apenas las tres últimas graduadas (dos en 1987 y la última en 1991) lo harían durante la restauración democrática.

¹⁷ Larraquy y Caballero le adjudican a la conducción de Montoneros una directa responsabilidad sobre la suerte de muchos de sus militantes. Cuando la represión paraestatal y estatal alcanzó niveles cada vez más altos, «miles de militantes que recorrían barrios, villas y fábricas en nombre de Montoneros los llamados 'perejiles' y las 'caras públicas' de la organización, afrontaron nuevas misiones en forma clandestina. Sin embargo, pocos de ellos contaban con una infraestructura para refugiarse» (2001: 15). Los mismos autores aseguran que los más perseguidos por organizaciones como la Triple A o la CNU fueron aquellos militantes de superficie que continuaron con sus vidas habituales y fueron fácilmente identificables.

A modo de conclusión

Como se ha podido mostrar a través de los actos administrativos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y los relatos de los informantes, existió una continuidad institucional que no permite encontrar rupturas tajantes que demarquen un antes y un después preciso. A contramano de las concepciones nativas, las rupturas de las que nos hablan los informantes no son sino, desde una mirada *etic*, cristalizaciones de procesos complejos, repletos de violencia, exclusiones, traiciones, sueños, frustraciones y, por supuesto, tragedia. Como también lo muestra Buchbinder (2005) en su análisis histórico de las universidades argentinas, la politización, radicalización y faccionalismo de la vida universitaria pueden entenderse como una continuidad, de manera especial a partir de 1966. Por eso, así como la *universidad nacional y popular* del 73 no hizo sino plasmar en actos concretos de gobierno la pujanza de enfoques preexistentes por ejemplo, lo de las cátedras nacionales, tampoco el Proceso Militar inauguró una etapa de represión, aunque obviamente la intensificó hasta niveles y procedimientos nunca vistos. Claramente existen hechos claves, sucesos que, si se permite alguna especulación ucrónica, podrían haber modificado ciertos procesos históricos, pero que, puestos en perspectiva, aparecen encadenados lógicamente de una manera tal que su comprensión global se hace más sencilla. El caso de la carrera de antropología de la Universidad de Mar del Plata nos enfrenta a ciertos elementos precisos de la historia disciplinar, pero además nos permite comprender los imaginarios de la década del setenta sin caer en fáciles demonizaciones, mitificaciones o apologías de actores sociales que se enfrentaron violentamente detrás de objetivos de distinta naturaleza. Este trabajo no pretende, por supuesto, refutar los ejercicios de memoria que los protagonistas de aquellas épocas realizan ni las lecturas retrospectivas, sino, por el contrario, plantear un marco documental preciso y amplio a partir del cual enmarcar esa memoria social que, ejercida desde el presente, aparece como la expresión de una experiencia colectiva que, como tal, identifica a todo un grupo, explicando su pasado y definiendo las aspiraciones del futuro (Fentress y Wickham, 1992). Como se ha tratado de mostrar, las condiciones propicias para que se instaure el terrorismo de Estado ya estaban presentes antes del golpe militar. La persecución ideológica, la construcción del otro como enemigo de los genuinos intereses nacionales eran moneda corriente en la universidad años antes de que los militares tomaran formalmente el poder, lo que concretaron además con importantes niveles de legitimidad (Quiroga,

2004; Novaro y Palermo, 2006). Todo ello en el marco de un país en el que los procesos históricos se ven claramente como el producto de rupturas, en el que «la compulsión a la reformulación del pasado en función del dualismo antagónico revela que este modelo de separación se impone como una ideología del rechazo a la continuidad, vista como contaminante» (Visacovsky, 2002: 327). Además, se trata de un marco complejo en el que los actores sociales construyen una «vigilancia ejercida con respecto al pasado» (Visacovsky, 2005: 294) que puede transformar una investigación de este tipo en un peligro evidente, al estar planteada la posibilidad de instituir una versión propia sobre los setenta, dado que «la fe en las versiones depende de estas reglas o marcos de plausibilidad pública; por lo tanto, los agentes deben no sólo postular interpretaciones que sirvan a sus intereses presentes, sino también hacerlas admisibles» (*Ibid.*: 300). Se trata, en definitiva, de lidiar con esquemas nativos que fragmentan el tiempo y que plantean el desarrollo de períodos más o menos autoritarios o, en este caso, también de sueños de revolución nunca concretados.

Bibliografía

- Amaral, Samuel (2005), «Prólogo», en Lanusse, Lucas, *Montoneros. El mito de sus 12 fundadores*, Buenos Aires, Vergara.
- Barletta, Ana M. (2001), «Peronización de los universitarios (1966-1973). Elementos para rastrear la constitución de una política universitaria peronista», en *Pensamiento Universitario*, 9, No. 9.
- Barletta, Ana M. y Lenci, M. Laura (2001), «Politización de las Ciencias Sociales en la Argentina», en *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, 8.
- Barletta, Ana María y Tortti, María Cristina (2002), «Desperonización y peronización en la universidad en los comienzos de la partidización de la vida universitaria», en Krotsch, Pedro (org.), *La Universidad cautiva*, La Plata, Al Margen.
- Buchbinder, Pablo (2005), *Historia de las universidades argentinas*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Calveiro, Pilar (2005), *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70*, Buenos Aires, Norma.
- Cavarozzi, Marcelo (2006), *Autoritarismo y democracia (1955-2006)*, Buenos Aires, Ariel.

- Fentress, James y Wickham, Chris (1992), *Memória Social: Novas perspectivas sobre o passado*, Lisboa, Teorema.
- Gutman, Daniel (2003), *Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina*, Buenos Aires, Vergara.
- Quiroga, Hugo (2004), *El tiempo del «proceso». Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983*, Rosario, Homo Sapiens.
- Lanusse, Lucas (2005), *Montoneros. El mito de sus 12 fundadores*, Buenos Aires, Vergara.
- Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto (2000), *Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA. Biografía no autorizada*, Buenos Aires, Norma.
- Martuccelli, Danilo y Svampa, Maristella (1997), *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada.
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2006), *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós.
- Ollier, María Matilde (2005), *Golpe o revolución. La violencia legitimada, Argentina 1966/1973*, Buenos Aires, Eduntref.
- Pucciarelli, Alfredo (ed.) (1999), *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en los tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba.
- Raimundo, Marcelo (2005), «Izquierda peronista, clase obrera y violencia armada: una experiencia alternativa», en *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, 15/16.
- Sáitta, Sylvia (2004), «Modos de pensar lo social. Ensayo y sociedad en la Argentina (1930-1965)», en Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano (comps.), *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina*, Buenos Aires, Paidós.
- Sarlo, Beatriz (2001), *La batalla de las ideas (1943-1973)*, Buenos Aires, Ariel.
- Sarlo, Beatriz (2003), *La pasión y la excepción*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Sigal, Silvia y Verón, Eliseo (2003), *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Eudeba.
- Suasnábar, Claudio (2002), «Debates universitarios y político-pedagógicos en la UNLP (1966-1973): continuidad institucional y radicalización política», en Krotsch, Pedro (org.), *op. cit.*
- Visacovsky, Sergio E. (2002), *El Lanús. Memoria y política en la construcción de una tradición psiquiátrica y psicoanalítica argentina*, Buenos Aires, Alianza.
- Visacovsky, Sergio E. (2005), «El temor a escribir sobre historias sagradas. Memoria social, moralidad política y audiencias nativas en la Argentina», en Frederic, Sabina y Soprano, Germán (comps.), *Cultura y política en etnografías sobre la Argentina*. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

Resumen

La persecución ideológica y la ofensiva oficial hacia las carreras humanísticas en general y la antropología en particular no comenzaron en la Argentina con el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Casi dos años antes de que las garantías democráticas desaparecieran completamente, las universidades fueron uno de los espacios escogidos para que el terrorismo paraestatal peronista simbolizado en la Triple A y la figura del ministro de Bienestar y Acción Social, José López Rega, desplegara sus armas sobre las casas de estudio. En el caso de la carrera de antropología de Mar del Plata, desde mediados de 1974 se fue desmantelando hasta prácticamente liquidarla hacia finales de 1975, cuando se cerró la inscripción. A partir del análisis de los documentos oficiales de la universidad y de los testimonios de quienes estuvieron involucrados en aquella experiencia, se pretende dar cuenta de un contexto de época que sentó las bases para que el proceso militar fuera apenas una continuidad de un camino que ya se había iniciado.

Palabras Clave: Universidad, represión, ciencias sociales

Abstract

It is widely accepted that during the last military dictatorship in Argentina, human and social sciences were privileged focus of ideological persecution and governmental attacks. Nevertheless, these serious persecutions and attacks did not begin with the *coup d'état* of March 24 of 1976. Almost two years before, during the presidency of María Estela Martínez, Argentinean universities were specially chosen by para-governmental terrorism, which was symbolized by the infamous Minister of Welfare, José López Rega, as places to develop its criminal actions. As a particular case, the School of Anthropology at the University of Mar del Plata suffered a dramatic process of dismantlement from the middle of 1974 to the end of 1975, when all the applications for the School of Anthropology were cancelled. Drawing both on official documents of the university and on testimonies of people who were engaged in that experience, in this article I aim at accounting for a historical context which laid the foundations of a tragic path that was going to be continued by the military process.

Key Words: University, repression, social sciences